N I C A R A G U A

DECRETO N° 372 (26-XI-1958, "La Gaceta" 3-XII-1958) **Ley especial sobre exploración y explotación de petróleo.**

Componen esta ley 79 artículos repartidos en VIII capítulos, el primero de los cuales, bajo el rubro "Disposiciones Generales e Investigación de Petróleo", establece los siguientes principios: todos los yacimientos o existencias naturales de petróleo, en cualquier estado, en la superficie o en el subsuelo del territorio, pertenecen al Estado (art. 1º). El término "petróleo" recibe amplio sentido, comprendiendo toda mezcla natural de hidrocarburos, los derivados de los mismos y las sustancias asociadas a ellos (gas natural, petróleo crudo, asfalto y esquistos) (art. 2º). La exploración y explotación de petróleo sólo podrá realizarse mediante las concesiones que establece esta ley (art. 3º), la cual se completa con las disposiciones de la "Ley General sobre Explotación de las Riquezas Naturales". El país se divide en cuatro zonas para los efectos de este ordenamiento (art. 4º) y, finalmente, la investigación o reconocimiento del petróleo es libre, siempre y cuando no se efectúen perforaciones para descubrir o producir petróleo y no se afecten derechos de terceros beneficiarios de concesiones ya existentes (arts. 5º y 6º).

El Capítulo II regula las concesiones de exploración. Se refiere, en general, a los preceptos de la Ley General sobre Explotación de las Riquezas Naturales, y sólo añade, en cuanto a los derechos del concesionario, los específicos para la exploración del petróleo (art. 7º). Establece el área máxima de exploración, según la zona, entre 150,000 y 400,000 hectáreas, y la mínima en 5,000, salvo excepciones (art. 9º a 11º). Obliga a un mínimo anual de inversión (art. 12º) y, bajo pena de caducidad, obliga igualmente a dar aviso de cualquier descubrimiento de petróleo comercialmente explotable, a la autoridad correspondiente (art. 13).

Las concesiones de explotación se reglamentan en el capítulo III. Estipula la ley en qué casos las concesiones de exploración se convierten, en todo o en parte, en concesiones de explotación, ya por disposición de la ley, ya por solicitud del concesionario (arts. 14 a 17); establece las obligaciones del concesionario (demarcación de parcelas, iniciación de trabajos, perforación) (art. 18) y fija las condiciones de lotificación de las concesiones, refiriéndose al número de lotes, orientación, localización, superficie máxima y mínima, etc. (arts. 21 a 25). La concesión termina a los 40 años, prorrogables por 20 más si se cumplen las condiciones (art. 26). Entre los derechos del concesionario se establecen: los propios del concesionario de exploración; el derecho de obtener licencia de refinación y manufactura o de transporte de petróleo o ambas; y el derecho de unificar sus trabajos dos o más concesionarios (arts. 27 y 28).

El Capítulo IV incluye disposiciones comunes a ambos tipos de concesiones: obligación de informar a la autoridad correspondiente de descubrimientos ajenos al petróleo; remitir información geológica y científica a la misma autoridad; solicitar autorización para operar en ciertas zonas; beneficiar a los empleados nicaragüenses en ciertos sentidos; prevenir y atacar hechos que produzcan pérdidas o actos peligrosos (arts. 30 a 35). Se otorga a los nicaragüenses con capital nacional el derecho de adquirir concesiones en condiciones ventajosas, que no podrán ser traspasadas a extranjeros (art. 36); se ordena, finalmente, el monto del depósito de garantía para concesiones petroleras y que varía según las zonas (art. 38).

En el Capítulo V se reglamenta prolijamente el derecho de los explotadores para obtener licencias de refinación y manufactura y licencias de transporte, aunque el Estado se reserva el derecho de otorgarlas a personas no titulares de una concesión (arts. 39 a 49). La participación del Estado y los impuestos se tratan y regulan en el Capítulo VI de la ley. Los impuestos toman como base la superficie ocupada por la exploración o explotación y la participación estatal toma como base la producción en bruto para el explotador y, para el concesionario de manufactura y refinación, el 50% de lo que por derechos e impuestos hubiera percibido el Estado de haber sido importado el producto. Los concesionarios de transporte pagarán un impuesto de 2% de lo que reciban en pago si hacen el transporte por cuenta de tercero (arts. 50 a 64). El Capítulo VII establece un impuesto especial sobre la renta para los concesionarios petroleros, sin perjuicio de que les sean aplicadas las disposiciones de las leyes generales sobre la materia (arts. 65 a 72). Finalmente, en el Capítulo VIII, la ley establece exenciones y limitaciones tributarias, cuya finalidad es proteger a los concesionario petroleros, tanto para desarrollar la industria petrolera, como para evitarles una excesiva carga fiscal.

Resumen por J. L. ZAMBRANO.

N I C A R A G U A

DECRETO N° 378 (27-XI-1958, "La Gaceta", 17-XII-1958), Ley de aclaraciones y rectificaciones.

Esta breve ley, que consta de 18 artículos, establece que toda persona natural o jurídica o instituto colegiado de carácter público o privado, a quien se perjudicare o se aludiere haciéndole algún cargo por medio de publicaciones que reproduzcan la palabra hablada o escrita, tiene derecho a defenderse con el fin de refutar los cargos o desvirtuar los hechos que se le imputen (art. 1°); cuando el aludido estuviese impedido o hubiese fallecido, igual derecho asiste por una sola vez a uno de sus parientes hasta el cuarto grado consanguíneo o segundo de afinidad (art. 1°); el escrito rectificatorio o aclaratorio no podrá contener injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, ni ataques a terceros extraños a la alusión (art. 1°). Las empresas de publicidad reproducirán sin costo alguno la rectificación, en la próxima edición de no ser diario, o dentro de 48 horas si lo son, a partir de su presentación; la publicación se hará en una sola edición, o radiodifusión en su caso, en el propio órgano publicitario, sin intercalar comentarios o apreciaciones, y en el mismo lugar forma y caracteres o espacio radial en que se dio a conocer la publicación que motiva la aclaración, la extensión de las aclaraciones no podrá ser mayor del doble que la de su motivo (arts. 2° y 3°). La ley establece reglas para cuando son varios los aludidos y para el caso de que comentarios, válidos sólo por separado, de la rectificación, den lugar a una nueva (arts. 3° y 4°). Para las radiodifusoras, se exige la lectura fiel de los textos y de ser improvisaciones, su grabación (art. 5°).

Establece la ley como necesaria la intervención del Jefe Político de la jurisdicción entre los requisitos de ejercicio del derecho, quien deberá conservar un ejemplar de la aclaración y autenticar por medio de una razón el que se entregue al órgano de publicidad; entrega en la que intervendrá un Secretario de Jefatura Política o un notario, quienes darán cuenta al Jefe Político, por medio de un oficio, de la fecha y hora en que se practicó la diligencia (art. 6°). El derecho prescribe en 10 días a partir de la publicación o de que haya cesado algún impedimento de los señalados por la misma ley para que el aludido pudiera defenderse; dos meses después de la publicación prescribe absolutamente el derecho, que cesa también porque se haga uso anterior en otro medio de publicidad para difundir la rectificación (art. 7°). Dispone la ley el derecho de la empresa para oponerse a la publicación cuando considera que la aclaración es demasiado extensa o no se ciñe a la publicación, debiendo el Jefe Político decidir quien tiene razón (art. 8°). Señala la ley las vías de apremio y sanciones aplicables a las empresas por no publicar las rectificaciones o publicarlas sin los requisitos

legales, las cuales aplicará el mismo Jefe Político, siendo las resoluciones del mismo apelables ante el ministro de la Gobernación (arts. 9º y 12). Reconoce la ley el derecho, aún en el caso de que sin mencionarse el nombre, sea deducible la alusión (art. 13.) En la última parte, la ley define qué considera, para sus efectos, empresa de publicidad; a quién debe considerarse competente como Jefe Político y a qué tipo de publicaciones es aplicable, aclarando que no podrá limitar en ningún sentido la libre emisión y difusión del pensamiento que garantiza la Constitución Política.

Resumen por J. L. ZAMBRANO.